

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO**

*Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021)*

**PROCESO NO.:** 1100140030-53-2021-00328-01  
**ACCIONANTE:** ROCIO MARIBEL PEPINOSA NARVÁEZ  
**ACCIONADA:** SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.  
**VINCULADOS:** MINISTERIO DEL TRABAJO  
EPS UT SERVISALUD SAN JOSÉ  
FUNDACION PROSERVANDA

**ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA**

---

*Se decide la impugnación propuesta por la accionante contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2021, por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Civil Municipal de Bogotá D.C., mediante la cual se negó el amparo constitucional invocado por el extremo accionante.*

**ANTECEDENTES**

- 1. La accionante acude a la institución prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad de obtener protección para sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud y debido proceso, presuntamente quebrantados por la Secretaria de Educación Distrital .*
- 2. Como fundamento de su queja adujo que, estuvo vinculada en provisionalidad con la Secretaria de Educación Distrital desde el año 2005 hasta el 4 de marzo de 2021.*
- 3. Durante la relación laboral comenzó a padecer una serie de enfermedades que deterioran su salud.*
- 4. Al regresar de su periodo de vacaciones en enero de 2021, se realizó audiencia virtual para reubicarla en una institución educativa; primero, en el Colegio Nicolas Esguerra, y luego en el Colegio Atanasio Girardot donde aceptó el cargo, aclarando en este último, no ser licenciada en el área de ciencias sociales, razón por la cual en los dos establecimientos fue rechazada.*

### **ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA**

**5.** Posteriormente el 4 de marzo de 2021, la Secretaría Distrital de Educación, emitió la Resolución 0392, donde dio por terminado su nombramiento aduciendo la no aceptación del cargo en el colegio Atanasio Girardot.

**6.** En contra de la anterior decisión presentó recurso de reposición, en subsidio apelación, el 16 de marzo siguiente, sin que se le haya resuelto, perjudicando sus derechos fundamentales invocados.

### **LA DECISIÓN IMPUGNADA**

*El a-quo en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de tutela negó el amparo deprecado, al considerar que "(...) la accionante no es titular de estabilidad laboral reforzada, además tampoco acredita ni sustenta los factores a partir de los cuales pretenda derivar el perjuicio irremediable, ya que como lo ha planteado la Corte Constitucional "la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela". Pues para que la tutela procesada como mecanismo transitorio se requiere que el perjuicio irremediable se encuentre plenamente probado, situación que aquí no pasa".*

### **LA IMPUGNACIÓN**

*Dentro de la oportunidad legal el extremo accionante, formuló impugnación contra la decisión de primera instancia, argumentando para ello, nuevamente los mismos hechos y derechos que dieron origen a invocar sus pretensiones negadas.*

### **CONSIDERACIONES**

*Este Juzgado de segunda instancia ostenta competencia para conocer y decidir la presente impugnación de conformidad con las previsiones, no sólo del Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del ejercicio de la acción de tutela, sino del artículo 2.2.3.1.2.1, del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, modificado por el Artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, el cual fija reglas para el reparto de las acciones de tutela.*

*En el sub-examine, advierte este Estrado Judicial que la inconformidad del extremo accionante radica en que, la Secretaria de Educación Distrital dio por terminado su nombramiento aduciendo la no aceptación del cargo en el colegio Atanasio Girardot,*

**ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA**

*sin que ello corresponda a la realidad de los hechos, lo cual vulnera sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud y debido proceso.*

*En ese orden, como primer punto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela se constituyó como un mecanismo de defensa judicial que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, cuando la acción u omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares, vulnera o amenaza tales derechos constitucionales, este mecanismo privilegiado de protección, es, sin embargo, residual y subsidiario.*

*En armonía con el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, sólo procede la acción de tutela cuando **(i)** el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial en el ordenamiento, caso en el cual la tutela entra a salvaguardar de manera inmediata los derechos fundamentales invocados, **(ii)** cuando existiendo otro medio de defensa judicial, éste no resulta idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados, o **(iii)** cuando existiendo el medio idóneo alternativo de defensa judicial, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.*

*En el entendido que es posible promover la tutela como mecanismo transitorio, aún sobre la base de la existencia de otro medio judicial, resulta imprescindible demostrar la ocurrencia de una amenaza o de una agresión actual e inminente que ponga en peligro el derecho fundamental, o lo que es igual, acreditar que el derecho presuntamente afectado se encuentra sometido a un perjuicio irremediable.*

*Así, la Corte en diferentes pronunciamientos ha considerado que para determinar la irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura como son: **(i)** la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; **(ii)** la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; **(iii)** la urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y **(iv)** la imposterqabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales.*

**ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA**

*En la Sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte Constitucional definió y explicó los elementos configurativos del perjuicio irremediable en el siguiente sentido:*

*“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:*

*A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.*

*B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan (sic) señalan la oportunidad de la urgencia.*

*C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.*

*D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.*

*De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio.” (Sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)*

**PROCESO No.:** 1100140030-53-2021-00328-01  
**ACCIONANTE:** ROCIO MARIBEL PEPINOSA NARVÁEZ  
**ACCIONADA:** SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

**ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA**

*Conforme lo anterior, es claro que tal como se indicó por el Juez de Primera Instancia la presente acción resulta improcedente, toda vez que la accionante cuenta con los recursos de reposición y apelación contra el acto administrativo por medio del cual se terminó su vinculación laboral, que para el caso ya ejerció y se encuentran pendientes de pronunciamiento por parte de la entidad accionada, o, medios de defensa judicial que pueden ser nulidad y restablecimiento del derecho en lo administrativo y/o proceso ordinario en lo laboral, todo lo cual, según corresponda a las condiciones particulares de la prestación del servicio.*

*Por tanto, no puede ahora pretender a través de este medio excepcional de defensa de los derechos fundamentales, crear una instancia adicional o un procedimiento paralelo al legalmente establecido.*

*De otro lado no se acreditó tampoco la existencia de un perjuicio irremediable, el cual se presenta en los eventos mencionados en la jurisprudencia transcrita y lo cual debe ser debidamente probado por quien lo alega, acreditando claramente las circunstancias que evidencien la urgencia y la gravedad del perjuicio que permitan determinar que la acción de tutela es impostergable y a pesar de existir otro medio de defensa judicial procede como mecanismo transitorio.*

*Así las cosas, sin necesidad de efectuar mayores consideraciones y por lo señalado en precedencia, se colige que hay lugar a ratificar la determinación adoptada por el fallador de primer grado.*

*En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,*

**RESUELVE**

**PRIMERO. - CONFIRMAR** el fallo proferido el 10 de mayo de 2021 por el **JUZGADO CINCUENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**, por los motivos señalados en la parte considerativa de esta decisión.

**SEGUNDO. - NOTIFICAR** este proveído por el medio más expedito a los intervinientes de tal manera que se asegure su conocimiento.

**PROCESO No.:** 1100140030-53-2021-00328-01  
**ACCIONANTE:** ROCIO MARIBEL PEPINOSA NARVÁEZ  
**ACCIONADA:** SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

**ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA**

**TERCERO. - REMITIR** el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,**



**CONSTANZA ALICIA PIÑEROS VARGAS  
JUEZ**

Firmado Por:

CONSTANZA ALICIA PINEROS VARGAS  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 038 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b9f22f792178849cb772870cd4e969bcb05288a602bc84256e7b6652c3ae444a**

Documento generado en 16/06/2021 06:03:17 AM